
Capítulo 5

Contribuir a la reconciliación

En cualquier lugar del mundo, una persona que ejerce un cargo de autoridad, y más aún si ha llegado a él por elección popular, puede, con su ejemplo, promover la convivencia pacífica o, por el contrario, incitar a la violencia en su comunidad.

Su uso del lenguaje, su comportamiento, la forma en que trata a críticos y opositores adquieren resonancia entre sus seguidores y pueden llegar a alcanzar, tanto en sentido positivo como negativo, un impacto que muy excepcionalmente pueden tener las acciones de una persona común.

En Colombia, ante la oportunidad que se nos ha dado de poner fin a más de 50 años de conflicto armado, la labor de nuestros dirigentes, y en especial la de alcaldes y gobernadores, es esencial para superar las desconfianzas, los odios heredados y las heridas que nos dejó la confrontación.

Con un conflicto cuyos efectos se han vivido especialmente en el territorio, el trabajo que los mandatarios locales deben hacer para promover el diálogo y la solución pacífica de conflictos entre los diferentes grupos que conforman su comunidad es esencial para alcanzar una sociedad reconciliada.

Trabajar en la atención y la reparación integral a las víctimas, dar oportunidades en la legalidad a quienes se reincorporan a la vida civil después de haber empuñado las armas, promover la inclusión de quienes históricamente han estado al margen de las oportunidades y generar espacios de encuentro para que todos los sectores de la comunidad puedan expresar sus diferencias, libre pero respetuosamente, son algunas de las acciones que ya vienen adelantando alcaldes y gobernadores de todo el país por la reconciliación.

Los ejemplos citados en este capítulo muestran que para trabajar por la reconciliación de sus comunidades alcaldes y gobernadores han debido acercarse a esos espacios en donde se produce el contacto diario entre las personas, la familia, el colegio, el estadio, el parque, para construir allí un nuevo tipo de relaciones marcadas por el respeto y la tolerancia.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pusieron en marcha el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas, para apoyar esas acciones. El programa brinda acompañamiento y apoyo técnico a un grupo priorizado de gobiernos municipales y departamentales, para que tengan las capacidades y competencias necesarias para la ejecución e implementación eficaz de la Ley de Víctimas.

En asocio con el programa, Colombia Líder valoró a los 43 entes territoriales que hicieron parte de él, con el propósito de destacar las mejores experiencias de implementación de la política de víctimas, documentarlas y difundirlas, para que otras administraciones que enfrentan realidades similares pudieran conocerlas y aprovecharlas.

Con base en este análisis, en 2016 entregó el reconocimiento Reparando desde el Territorio, que destacó los esfuerzos hechos por administraciones locales y regionales para dar una atención digna a las víctimas, ofrecerles oportunidades de trabajo, vivienda, salud y educación, entre otros, e integrarlos y hacerlos partícipes de la vida comunitaria. Un punto en común tenían los ganadores de este galardón: el hecho de reconocer a las víctimas como miembros activos de su comunidad, con mucho que ofrecer para su desarrollo.

En esta misma línea, Colombia Líder también reconoció, con el apoyo de Reconciliación Colombia, USAID y OIM, a los alcaldes y gobernadores que a través de sus acciones promovieron la reconciliación en sus territorios.

Esas acciones incluyeron programas relacionados con la recuperación de la memoria, el fomento de la cultura ciudadana, la solución pacífica de conflictos, la inclusión de grupos marginados y el apoyo al retorno de los desplazados, entre muchas otras.

Como lo muestra el ejemplo dado por los ganadores de estos reconocimientos, entender que vivimos en un país diverso y buscar que todos seamos tenidos en cuenta es el mejor camino para construir la paz.

Adicionalmente, realizamos más de 55 talleres a lo largo del país con los candidatos a ocupar los cargos de alcaldes, gobernadores, diputados concejales para el período 2016-2019 bajo el eslogan “Preparámonos para ser los mejores gobernantes... por la reconciliación y la inclusión” e hicimos parte de la iniciativa “Gobernantes y posconflicto”, con el fin de posicionar en la agenda de los nuevos mandatarios regionales y locales los temas de la reconciliación, la paz territorial y la convivencia.

5.1 Saber resolver las diferencias

La violencia sin duda fue el huésped de horror que se tomó a San Jacinto (Bolívar) durante muchos años y provocó el desplazamiento de miles de personas. El éxodo más numeroso en el municipio ocurrió en 1996. Unas 1.500 personas huyeron de Bajo Grande por cuenta de los paramilitares.

Luego de este doloroso capítulo, los desplazados han retornado a su pueblo y ahora trabajan en la reconstrucción de sus vidas, de sus formas de producción y de la cotidianidad que perdieron. Para lograrlo fue esencial un acompañamiento en el diseño del protocolo de retornos y reubicaciones, con políticas claras que tuvieran en cuenta la idiosincrasia de los retornados y se tradujeran en un programa de generación de ingresos que contemplara sus capacidades antes de surgir el hecho victimizante.

Hoy, la administración de Abraham Antonio Kamell Yaspe⁸⁶, alcalde de San Jacinto para el período 2016-2019, resalta, como uno de sus principales logros, la implementación de la Ley de Víctimas. La clave fue la participación directa de la comunidad, a través de sus líderes y organizaciones de víctimas y la participación de organismos defensores de derechos humanos, teniendo como base fundamental una política pública incluyente.

El gobierno municipal cuenta con un equipo amplio de profesionales en psicología y trabajo social que trabajan en terreno y llegan a las casas de las víctimas, para determinar sus necesidades y evaluar las consecuencias que produjo en ellos el conflicto armado, para buscar soluciones a las necesidades de cada afectado e incluirlos en los programas adelantados. Esto es comple-

86 Abraham Antonio Kamell Yaspe, alcalde de San Jacinto (Bolívar) 2016-2019, municipio finalista del Reconocimiento Reparando desde el Territorio a las Mejores Experiencias del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas, en la categoría de municipios.

mentado por un sistema de verificación en línea, en el que los funcionarios del orden municipal constatan los predios reclamados, para determinar si son beneficiarios de la exoneración del pago de impuesto predial a terrenos restituidos que promovió el Comité Territorial de Justicia Transicional.

“No hay camino para la paz, la paz es el camino. Paz en la casa, paz en la calle, paz en nuestros corazones” es el lema de los pobladores de San Jacinto.

En el plan de desarrollo del alcalde Abraham Kamell también se incluyó la Cátedra de Paz. La alcaldía considera que, en forma simultánea con esta cátedra, los centros educativos deben reactivar el trabajo de las escuelas y las asociaciones de padres de familia, con la perspectiva de capacitarlos para que estos reconstruyan valores que aporten a la convivencia pacífica y la reconstrucción del tejido social. Además, la administración del municipio trabaja en la creación de una estrategia para que los niños y adolescentes, conozcan y retomen su propia cultura, como las danzas, los cantos, la artesanía y la construcción de instrumentos musicales.

“La reivindicación de las víctimas debe ser dignificada con proyectos que repongan en parte lo que perdieron cuando se desplazaron”, son las palabras del mandatario, quien tiene como eje central de su política pública recuperar valores y potenciar las herencias ancestrales para olvidar los desastres de la guerra.

En materia de fortalecimiento institucional, la alcaldía adecuó un punto de atención, dotado con equipos de cómputo adecuados, acceso a internet de alta velocidad, con un grupo de trabajo amplio y un coordinador capacitado en todos los temas concernientes a víctimas, capaz de solventar o solucionar cualquier situación, por muy compleja, con un enlace municipal de víctimas.

Actualmente se ejecutan tres proyectos para víctimas del conflicto armado interno, que benefician a 135 familias (40 con proyectos de maíz, 50 de gallinas ponedoras y 45 de cerdo de engorde).

Todas estas acciones están acordes a lo plasmado en su plan de desarrollo 2016-2019 “San Jacinto adelante, gestión orientada a resultados”.

5.2 La ilusión de retornar

Los habitantes de San Carlos (Antioquia), municipio al que los ataques de todos los actores armados hicieron prácticamente desaparecer, comenzaron a volver a sus casas en la primera década de este siglo.

No esperaron a que existieran conceptos favorables de seguridad ni acompañamiento de las autoridades. Su valentía y sus ganas de recuperar lo que habían perdido para seguir adelante fueron suficientes.

María Patricia Giraldo Ramírez⁸⁷, que también fue víctima, era la persona del municipio cuando eso estaba sucediendo. Su labor de acompañamiento a este retorno hizo que muchos de los habitantes de la población le propusieran lanzarse a la alcaldía. “La gente me decía: ‘Usted puede continuar con esto’”, recuerda.

La alcaldesa Giraldo, que ocupó el cargo entre 2012 y 2015, hizo una alcaldía orientada a darle a la gente de San Carlos “dignidad en el retorno”. Para ese momento, casi el 80 % de los 25.000 habitantes de la población se habían desplazado, es decir, unos 20.000. Hoy en día ya han retornado unos 14.500.

Pero volver no era suficiente. Para que los habitantes de San Carlos pudieran vivir en su tierra en condiciones de dignidad fue necesario poner en marcha programas de vivienda, reconstruir las carreteras, incluirlos en los procesos de restitución de tierras y darles oportunidades de trabajar de nuevo en el campo.

Y no todas las necesidades eran materiales. Rescatar la memoria de lo ocurrido, promover la participación de las víctimas en los asuntos del municipio y recuperar la confianza de los sancarlitanos en la Fuerza Pública era esencial para volver a construir una verdadera comunidad.

“Si hay voluntad, las cosas se pueden hacer. Aunque ellos tenían la voluntad de retornar, si en las autoridades no hubiera habido voluntad, no se habría podido hacer”, explica.

87 María Patricia Giraldo Ramírez, alcaldesa de San Carlos (Antioquia) 2012-2015, ganadora del Reconocimiento a los Mejores Gobernantes en Reconciliación, en la categoría de municipios entre 10.001 y 20.000 habitantes.

Gracias a este esfuerzo, San Carlos se convirtió en un ejemplo de retorno exitoso y de atención integral a las víctimas.

“A uno a veces se le achocolatan los ojos al recordar, pero aprendimos que se puede tener esperanza. Si bien perdimos familiares, amigos y vecinos, nos dimos cuenta de que siempre hay posibilidades de salir adelante”, concluye.

Se realizó una reparación transformadora del territorio porque además de llevar a las personas al sitio de donde habían sido desplazadas, se generó una transformación: se reconstruyeron puentes, vías, escuelas, casetas comunales; se volvió a sembrar la tierra. Pero, sobre todo, se les pudo brindar la seguridad y la tranquilidad que necesitaban las familias que retornaron a su territorio.

Señala la alcaldesa: “Donde antes estaba sembrado de minas había presencia de los grupos armados ilegales, ocurrían los actos de victimización, los homicidios y los desplazamientos, allí llevamos con todo el equipo de la administración municipal a las familias de manera digna a sus veredas, lo que les permitió reconstruir su proyecto de vida”.

Estas familias pudieron volver a poner a funcionar sus fincas, se volvió a la dinámica propia de las veredas alrededor de las casetas comunales, se hizo la reapertura de la escuela. Sin duda, estos son hechos transformadores para un territorio con la historia que tiene San Carlos. “Hemos marcado una huella supremamente esperanzadora para nuestros ciudadanos y para las futuras generaciones”, puntualiza la alcaldesa María Patricia Giraldo.

5.3 La responsabilidad compartida frente al retorno: los casos de Medellín, Envigado y Cali

Pero este proceso de retorno no hubiera sido posible sin el apoyo de la alcaldía de Medellín, ciudad en la que se encontraban buena parte de los sancarlitanos desplazados.

Alonso Salazar Jaramillo, alcalde en la época en que empezó el proceso, entendió que el retorno no era solo un problema de San Carlos y apoyó un proyecto piloto, dirigido a 300 familias interesadas en retornar, para respaldar su esfuerzo. Además de las alcaldías de Medellín y San Carlos, el proyecto tuvo el apoyo de Proantioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM).

“Lo que pretendemos es que regresen a sus hogares de manera digna y mejoren su economía. No es que queramos echarlos de Medellín, pero ellos merecen retornar”, manifestó en esa oportunidad el alcalde Salazar.

La alcaldía de Medellín y EPM apoyaron con recursos el proceso que incluía oferta de vivienda digna para quienes retornaban, acompañamiento psicosocial, oportunidades productivas y acciones de reparación simbólica y reconstrucción de la memoria.

No importaba que estas inversiones no se concretaran en obras que estuvieran ubicadas físicamente en Medellín. Era parte del compromiso de la ciudad con el entorno de su departamento.

Y con este ejemplo, la ciudad continuó apoyando el retorno de personas desplazadas a todo el oriente antioqueño, incluidos municipios como San Rafael, Granada, San Luis, San Francisco y Cocorná.

Para el caso concreto de San Carlos, se firmó una alianza entre su alcaldía y la de Medellín, bajo la administración de Aníbal Gaviria, quien mantuvo la política que había diseñado Alonso Salazar, con el objetivo de garantizar un retorno digno a 134 familias que voluntariamente manifestaron a la alcaldía de Medellín su deseo de retornar dignamente y recuperar su vida de antes. Como parte del proyecto, en el que también tomó parte EPM, se entregaron a las familias unas viviendas llamadas Aldeas (casas tipo cabañas), ayuda humanitaria, proyectos productivos y de generación de ingresos, y ayuda psicosocial. “Prácticamente se les brindó un kit completo para que pudieran sobrevivir y de una u otra forma recuperar su vida de antes, que pudiesen tener nuevamente sus cultivos, sus animalitos, etc.”, señala la alcaldesa de San Carlos, María Patricia Giraldo.

Envigado (Antioquia) vivió una situación similar a la de Medellín. Es lo que se conoce técnicamente como un municipio receptor de desplazados, más que expulsor. Es decir, en los últimos años llegaron allí más personas huyendo de la violencia que las que lo abandonaron.

En su mayoría, venían buscando refugio de municipios del oriente antioqueño, como San Carlos, San Francisco, El Santuario, San Rafael, Apartadó o Sonsón, en donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales provocaron el éxodo de buena parte de la población.

“Muchos alcaldes les sacaban el cuerpo a las víctimas porque pensaban que primero hay que trabajar por nuestra gente, que para qué trabajar por los foráneos.

Pero es una cuestión humanitaria”, explica Héctor Londoño Restrepo⁸⁸, quien gobernó el municipio entre 2012 y 2015 y fue finalista del Reconocimiento a los Mejores Gobernantes en Reconciliación que otorga Colombia Líder.

Sin descuidar a la población tradicional de Envigado, su administración ofreció apoyo a las víctimas que llegaron a su municipio, tanto para las que querían regresar a su tierra como para las que se querían quedar.

Para quienes prefirieron quedarse, hubo apoyo psicológico y económico, oportunidades de educación y subsidios para adquirir vivienda, mientras que a quienes retornaron se les dieron aportes para recuperar sus casas y poder cultivar sus tierras.

De manera conjunta con los municipios de los que habían huido los desplazados, se realizaron actividades para recuperar la memoria, impulsar proyectos productivos y, en general, mejorar las condiciones de vida de las víctimas. El argumento de que se estaba trabajando por la población de otros municipios, por fortuna, no convenció a la gente.

“Ver la alegría de estas personas retornando a sus municipios, sabiendo que volvían a su terruño, es algo que lo llena a uno de satisfacción. Lo mismo que los que lograron reconstruir su vida en Envigado. Esa es la compensación más grande –dice el alcalde Londoño, quien destaca la solidaridad de los habitantes de su municipio–. Nunca se vio rechazo a esta población”.

El retorno de estas familias a sus tradiciones y costumbres fue el resultado del buen desarrollo de las mesas de participación municipal, en las que las víctimas del conflicto armado, incluidos representantes de sus organizaciones y grupos de defensa de sus derechos, pudieron definir, con el acompañamiento de la Personería Municipal, sus planes de trabajo y de acción, presentar informes para el Concejo Municipal y el Comité Territorial de Justicia Transicional y elegir sus representantes de participación ciudadana y consejeros para el territorio local de planeación y de participación ciudadana y discapacidad, entre otros.

El retorno de los indígenas embera que estaban desplazados en Cali, en mayo de 2015, durante la administración del alcalde Rodrigo Guerrero Velasco⁸⁹, muestra el esfuerzo conjunto que es necesario para llevar a cabo este tipo de procesos.

88 Héctor Londoño Restrepo, alcalde de Envigado (Antioquia) 2012-2015, finalista del Reconocimiento a los Mejores Gobernantes en Reconciliación, en la categoría de municipios de más de 100.001 habitantes.

89 Rodrigo Guerrero Velasco, alcalde de Santiago de Cali (Valle del Cauca) 2012-2015, ganador del Reconocimiento a los Mejores Gobernantes en Reconciliación, en la categoría de ciudades capitales.

Paulatinamente, 210 miembros de la comunidad fueron llegando a la ciudad, desde 2012, procedentes de Pueblo Rico (Risaralda), de donde tuvieron que huir a causa de la pobreza y la violencia. Aunque la ciudad les brindó atención humanitaria, sus condiciones de vida eran lamentables, vivían de la mendicidad o de la venta de artesanías, hacinados en inquilinatos y perdiendo día a día los elementos propios de su cultura.

El día anterior a su retorno, los indígenas se despidieron de Cali con sus rituales, cantos y danzas. Ahí comenzó una compleja operación logística para llevarlos de nuevo a sus resguardos. En palabras del alcalde, “durante el proceso de regreso se elaboró un plan de acompañamiento permanente en salud para la población, pusimos en funcionamiento un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), para atender a los niños con un enfoque diferencial, e incluso se dispuso de profesores que dominaran la lengua embera en las instituciones educativas adonde asistían los jóvenes”.

Cali, que lideró el proceso, aportó recursos para que los indígenas pudieran construir viviendas definitivas en su lugar de destino; el gobierno, a través de la Unidad para las Víctimas, entregó los materiales para la construcción, y la alcaldía de Pueblo Rico y la gobernación de Risaralda se responsabilizaron de adecuar los caminos comunales, los puentes, las instituciones educativas y los puestos de salud para atender a la comunidad.

Garantizar el retorno no era suficiente; era necesario dar condiciones a las familias retornadas para que pudieran rehacer su vida en sus comunidades. Así dijo el alcalde en su momento:

“Como municipio tenemos claras nuestras responsabilidades y vamos a hacer lo mejor posible por cumplirlas, pero no lo vamos a poder hacer solos. Estamos demandado un esfuerzo de coordinación con autoridades regionales para prevenir y atender el desplazamiento en los lugares de origen para que la única alternativa de las víctimas no siga siendo desplazarse hacia a Cali”.

Los indígenas embera-katío emprendieron el regreso a su tierra el 5 de mayo de 2015, a eso de las 7:30 de la noche, en cinco buses. Los seguían cinco camiones cargados de enseres domésticos.

El caso de los embera-katio es apenas una muestra del fenómeno de desplazamiento que afecta a Cali desde comienzos del conflicto armado, pero que se incrementó a finales de los años 1990 debido a la llegada de grupos paramilitares al Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Por eso y como resultado del crecimiento del fenómeno, la administración municipal dispuso dos oficinas de atención a desplazados en el Terminal de Buses y en el Distrito de Aguablanca. En estos lugares se pusieron en funcionamiento dos Puntos de Información y Orientación, conocidos como PIOs. Allí, las personas pueden realizar consultas sobre el avance de sus gestiones ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. También se informan sobre qué tipo de documentos deben tener para vincular a su núcleo familiar al sistema de salud y educación, obtener citas y ser remitidos al hogar de paso.

5.4 Oportunidades para las víctimas

Ciénaga (Magdalena) fue una de las poblaciones de la región caribe más afectadas por el conflicto armado. Más de 20.000 personas están registradas como víctimas en el municipio, en su mayoría a causa de ataques paramilitares de finales de los años noventa y comienzos de este siglo.

Veinte años después, Ciénaga es, en cambio, un ejemplo de la transformación que se produce en una comunidad cuando se cumple con la atención y reparación integral a las víctimas y la restitución de tierras que ordena la ley.

En La Secreta, una de las cuatro veredas de este municipio, en donde los paramilitares asesinaron a 20 personas en 1998, se ven ya los resultados del trabajo conjunto de varias entidades del orden nacional, la alcaldía municipal y las agencias de cooperación internacional.

Más de 500 hectáreas han sido entregadas en fallos de restitución de tierras a favor de 300 personas. Las víctimas beneficiarias se organizaron en la Asociación de Agricultores Orgánicos de La Secreta (Agrosec) y hoy en día exportan café a varios países y están incursionando en otros productos, como la miel de abejas.

Edgardo de Jesús Pérez Díaz⁹⁰, actual alcalde de Ciénaga (Magdalena), municipio que obtuvo el reconocimiento Reparando desde el Territorio por el respaldo que

90 Edgardo de Jesús Pérez Díaz, alcalde de Ciénaga (Magdalena) 2016-2019, municipio ganador del Reconocimiento Reparando desde el Territorio a las Mejores Experiencias del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas, en la categoría de municipios.

la administración municipal ha dado a este proceso y en general a la atención y reparación a las víctimas en el municipio. Al recibirlo manifestó:

“Es una disposición que el gobierno local tiene para hacer una atención integral y poder pasar de esa atención a convertir a las víctimas de Ciénaga en actores ideales para la transformación de este país. Y qué mejor que las víctimas que las personas que fueron arrasadas por la guerra se conviertan en actores de la nueva Ciénaga, del nuevo Caribe, de la nueva Colombia que queremos”.

Y agregó: “Lo más importante ha sido poder escucharlos, poder entender sus lágrimas, sus llamados y movernos en la dirección de cumplirlos. Víctima se escribe con la V de valiente. Llegó el momento de superar el espíritu de dolor y hacer un espíritu propositivo”.

Por eso los programas que desarrolla la administración tienen énfasis en fomentar el liderazgo y la participación de las víctimas en la construcción de las políticas públicas del municipio, en la formulación del plan de desarrollo y del plan de ordenamiento territorial y así convertirlas en agentes de la transformación, es decir, en verdaderos agentes de cambio.

“¿Quién mejor que ellos para hablar de territorio, de las circunstancias que los llevaron a desplazarse y a ocupar tierras que no les pertenecían?”, afirma el mandatario local.

En este sentido, la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas, representada por 15 organizaciones de víctimas, se ha convertido en Ciénaga en un espacio vital para el proceso de planeación estratégica. Allí se han debatido, además del tema de víctimas, aspectos presupuestales del plan de desarrollo y las políticas del posconflicto. Así mismo, es el punto de encuentro para la integración que busca la administración municipal.

Con recursos de regalías, el municipio ha realizado la reparación integral de víctimas de Cerro Azul y La Secreta, las cuales fueron reconocidas como sujetos de reparación colectiva. Allí se viene realizando la adecuación y dotación de infraestructura social y comunitaria.

“También ha realizado el diseño y la implementación de programas y proyectos productivos para la generación de ingresos, en los casos

de reparación colectiva. En esas mismas comunidades se ejecutan proyectos para desarrollar programas recreativos y deportivos y crear procesos que permitan fortalecer el autocuidado de las comunidades. Igualmente, les han entregado capital semilla para el establecimiento de unidades productivas y, de esa manera, fortalecer la generación de ingresos en la población en proceso de reintegración y hacerla sostenible, para que las familias permanezcan en la legalidad. En forma paralela, la administración municipal apoya la vinculación laboral de las personas en proceso de reintegración y sus familias en el sector público y en las empresas privadas que tienen sus sedes o sitios de trabajo en Ciénaga”.⁹¹

El fortalecimiento de las asociaciones de víctimas para el desarrollo de proyectos productivos, el acompañamiento a la mesa de víctimas, las jornadas de atención integral y la elaboración de un plan de atención a la población desplazada son otras de las estrategias que estableció la administración de Ciénaga para brindarles oportunidades a las víctimas.

En Samaná (Caldas) se está dando una transformación similar. A finales de la década pasada, el corregimiento de San Diego, de este municipio, estaba completamente aislado a causa del conflicto armado.

“Por la violencia, los recursos no llegaban. El corregimiento se fue quedando estancado en el tiempo”, explica Wilder Iberson Escobar Ortiz⁹², alcalde de Samaná entre 2012 y 2015. El lugar era sede de enfrentamientos entre el Frente Ómar Isaza, de los paramilitares, y el Bloque 47, de las Farc.

Un proyecto clave para la comunidad, hecho con la ayuda de muchas manos, sería el que finalmente lograría revitalizarlo.

“Aunque su principal actividad era la ganadería, el corregimiento no tenía una plaza de ferias”, relata el gobernante. Para construirla, la alcaldía utilizó los recursos que la Unidad para las Víctimas asigna a través del sistema de cofinanciación.

91 Alcaldía de Ciénaga (Magdalena), postulación al Reconocimiento Reparando desde el Territorio a las Mejores Experiencias en el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas 2016.

92 Wilder Iberson Escobar Ortiz, alcalde de Samaná (Caldas) 2012-2015, finalista del Reconocimiento a los Mejores Gobernantes en Reconciliación, en la categoría de municipios entre 20.001 y 100.000 habitantes.

“La alcaldía puso el maestro de obra; la Unidad, los recursos para los materiales (unos 50 o 60 millones de pesos) y la comunidad, la mano de obra”, cuenta. Finalmente, se logró sacar adelante la obra, necesaria para el corregimiento, y eso ayudó a recuperar la confianza de la comunidad en sus instituciones.

Trabajar por las víctimas, en Samaná, era trabajar por toda la población. En este municipio, el más golpeado por la violencia en el departamento de Caldas, de sus 25.700 habitantes, 24.000 son víctimas.

Cuando Wilder Escobar llegó a su cargo, la seguridad ya se había estabilizado, pero la desconexión entre sus habitantes y las instituciones permanecía. Samaná es el municipio con la mayor extensión del departamento y el 80 % de su territorio es rural. Tiene 170 veredas y cuatro corregimientos.

“Nos llevábamos la alcaldía para las veredas y les prestábamos servicios por tres días. Lo más interesante de esa experiencia es que solucionábamos problemas reales en tiempo real”, dice.

De esta manera, y a través del programa “Asistiendo y atendiendo a víctimas del conflicto armado interno”, la alcaldía de Samaná se propuso lograr la atención integral a todas las víctimas del conflicto armado interno garantizando su adecuada vinculación en todos los programas del nivel nacional y territorial con el fin de aportar a la reparación integral a la que tienen derecho.

Además, se desarrolló el plan de acción territorial de atención y reparación a las víctimas abarcando la mayoría de los programas desarrollados en el plan de desarrollo municipal del alcalde Escobar, lo que permitió que un gran número de personas víctimas participaran de todos los programas desarrollados por la entidad territorial, así como de los programas sociales de atención a esta población.

Florencia (Caquetá), bajo la administración del alcalde Andrés Mauricio Perdomo Lara⁹³ (2016-2019), es un ejemplo de cómo las autoridades locales pueden articularse en su interior y con los demás niveles de gobierno para atender adecuadamente a las víctimas y brindarles oportunidades. Esto hizo posible que la alcaldía obtuviera el Reconocimiento Reparando desde el Territorio, entregado por Colombia Líder, USAID y OIM.

93 Andrés Mauricio Perdomo Lara, alcalde de Florencia (Caquetá) 2016-2019, municipio ganador del Reconocimiento Reparando desde el Territorio a las Mejores Experiencias del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas, en la categoría de ciudades capitales.

Florencia tiene uno de los más altos índices de víctimas del conflicto armado: 136.000 personas, aproximadamente, que corresponden al 60 % de su población, pero, de alguna manera, todos sus habitantes han sido afectados por el conflicto.

La magnitud del reto exigía una administración comprometida en su conjunto con la atención a las víctimas, de modo que el alcalde designó una Unidad Técnica, conformada por un profesional de cada secretaría de su despacho, que debía encargarse de dar respuesta oportuna y eficiente a los requerimientos de la población.

Esta articulación también incluye una coordinación con las entidades del orden nacional, que ha permitido, entre otras, que la capital de Caquetá cuente con profesionales especializados en materia de asuntos étnicos y la creación de una oficina de la mujer, un consejo de juventud y oficinas para las personas mayores y la población LGBTI, que dan atención a las víctimas con enfoque diferenciales.

La administración diseñó una estrategia integral que, sin desconocer la atención de necesidades urgentes, está orientada a provocar transformaciones de fondo, provocando en las víctimas un cambio de mentalidad, que les permita asumirse como sujetos con derechos y deberes, capaces de iniciar proyectos de emprendimiento que les aporten a ellos, a la ciudad y a sus familias. Esta estrategia busca incidir también en el índice de informalidad de la ciudad, que llega al 64,4 % y promover alternativas de empleo, ya que en Florencia el mayor empleador es el sector público.

La estrategia también incluye la oferta de soluciones de vivienda y de espacios para la realización de actividades culturales, así como la reconstrucción de los lazos familiares, que fueron afectados por el conflicto, especialmente para proteger a los niños, que en algunos casos han tenido que crecer en familias rotas o que perdieron a sus principales miembros.

“Cuando uno recorre las calles de Florencia y ve tantas tragedias en distintas familias, se da cuenta de que esas familias son la mayoría de los florencianos. Esa es la mayor motivación”, manifestó el alcalde Perdomo.

Para hacer sostenibles los proyectos con las víctimas, la administración fortaleció la Secretaría de Inclusión y Reconciliación, encargada de liderar y articular las políticas dirigidas a la población vulnerable y de garantizar que las víctimas se involucren y ejerzan liderazgos que contribuyan a transformar a la ciudad.

5.5 Oportunidades para quienes dejan las armas

Las autodefensas campesinas de Ortega fueron un grupo armado ilegal que operó en el Cauca desde los años setenta y se desmovilizó en 2003, bajo la Ley de Justicia y Paz.

Sus 126 hombres no hicieron parte de la estructura nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Empuñaron las armas para defender su territorio de los ataques de las Farc, pero en los largos períodos en los que no combatían se dedicaban a cultivar sus tierras.

Héctor José Guzmán⁹⁴, alcalde de Cajibío (municipio del que hace parte el corregimiento de Ortega), llegó al cargo en 2012, cuando la reintegración de este grupo aún no había concluido. Encontró que mucho de lo que se les había prometido para que dejaran las armas no se había cumplido.

Ni siquiera les habían entregado una carretera que necesitaban para sacar sus productos, cuenta el alcalde Guzmán. El corregimiento de Ortega estaba a seis horas de camino de la cabecera municipal de Cajibío. Con los arreglos que se le hicieron a la vía, la distancia se redujo a cuatro horas, pero aún faltaba mucho para que estuviera terminada.

Los habitantes de Ortega necesitaban además alternativas económicas lícitas. “Los tentaban los cultivos ilícitos y la minería ilegal”, afirma el mandatario.

La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), USAID y la alcaldía de Cajibío llevaron a cabo un proyecto para recuperar la productividad de la zona, especialmente a través del café. Los predios de los campesinos fueron formalizados y se invirtieron más de 570 millones de pesos en impulsar sus proyectos productivos.

Ese esfuerzo le cambió la cara al corregimiento. “Lo llamamos el Quindío del Cauca –anota el alcalde–. Lo que se debe tener en cuenta es que la gente que se desmoviliza necesita un apoyo permanente. No que les den las cosas, sino darles oportunidad para que produzcan. A eso apuntamos nosotros”.

94 Héctor José Guzmán, alcalde de Cajibío (Cauca) 2012-2015, finalista del Premio Mejores Alcaldes y Gobernadores 2012-2015, en la categoría de municipios entre 20.001 y 100.000 habitantes.

5.6 Cerrarles el espacio a los violentos

En enero de 2011, ocurrió en San Bernardo del Viento (Córdoba) un crimen que conmocionó a todo el país. Mateo Matamala y Margarita Gómez, dos estudiantes de Biología de la Universidad de los Andes, fueron asesinados por una banda criminal, por el simple hecho de ser extraños en la región.

Cuando Luis Francisco López Arteaga⁹⁵, alcalde del municipio entre 2012 y 2015, asumió el cargo, la población aún no se reponía del impacto que le produjo el crimen. A nivel local, la desconfianza y el temor se habían apoderado de muchos de sus habitantes, y a nivel nacional, cargaba con el estigma de ser un lugar peligroso que era mejor no visitar.

Apenas se posesionó, el alcalde convocó una reunión en una sede militar y recorrió todo el municipio acompañado por el comandante de la Policía. Algunos concejales temían que esa fuera una provocación a las bandas criminales, pero él consideraba necesario hacerlo. “Esa era la primera muestra de que había una institucionalidad”, dice.

Todos los sábados, el alcalde López realizaba reuniones con la comunidad para que sintieran que no estaban solos. Eso hizo que los habitantes del municipio, algunos víctimas de la extorsión de las bandas, fueran tomando confianza y se atrevieran a denunciar.

Simultáneamente, para recuperar la economía del municipio, promovió la asociación de los productores agrícolas en cooperativas que los hicieran más competitivos. De 15 asociaciones de productores que existían al comenzar la administración de Luis F. López llegaron a ser 120 al final de su mandato, incluyendo productos como arroz, plátano y ñame.

También, con la intención de mostrar la “cara amable de San Bernardo”, promovió el turismo a través de una corporación que representaba todos los servicios que estaban relacionados con este sector. El mar, que hasta entonces no se había visto como una fortaleza del municipio, se convirtió en un destino turístico e incluso surgió una alternativa de agroturismo, para quienes quisieran conocer cómo se hacía la producción agrícola de la región.

95 Luis Francisco López Arteaga, alcalde de San Bernardo del Viento (Córdoba) 2012-2015, preseleccionado del Premio Mejores Alcaldes y Gobernadores 2012-2015, en la categoría de municipios entre 20.001 y 100.000 habitantes.

Estas nuevas alternativas productivas hicieron que los diferentes sectores del municipio, entre los que había desconfianza, comenzaran a relacionarse y a echar abajo las fronteras imaginarias que habían surgido a causa de la presencia de diferentes bandas criminales.

“Esa interacción para cosas sencillas hizo que los habitantes de un sector se conocieran con los del otro y se dieran cuenta de que quienes pusieron la línea fueron los grupos ilegales y no ellos”, comenta.

5.7 Alternativas frente a la violencia

Varios de los ganadores del Reconocimiento Mejores Gobernantes en Reconciliación demostraron que el deporte y la cultura son las mejores alternativas contra la violencia. Ofrecen a los jóvenes actividades sanas en qué ocupar su tiempo y pueden unir a una comunidad en un mismo propósito.

José Wilmer Leal Abril⁹⁶, alcalde de Belén (Boyacá) para el período 2012 y 2015, impulsó durante su mandato una banda sinfónica, un grupo de música carranguera y una clase de pintura, en la que llegaron a tomar parte 270 niños, jóvenes y adultos, y construyó un lugar para que pudieran practicar, la Casa de la Cultura, a la que dotó de equipos para facilitar el aprendizaje.

Aunque estas actividades estaban destinadas a toda la población, la prioridad eran los niños y niñas de bajos recursos y las víctimas de la violencia. Como buena parte de los estudiantes eran de la zona rural, se le dio mayor énfasis a la música carranguera.

“El objetivo es darles una herramienta gratuita, idónea, a nuestra infancia y a nuestra adolescencia para alejarlas de los caminos de la violencia, así como del alcoholismo o de las drogas. Con participación de la comunidad, queremos preparar una serie de actos culturales para que usen su tiempo libre en esas actividades”, dijo el alcalde.

Giovanni Díaz Ramos, alcalde de Cóbbita (Boyacá) en el mismo período, invirtió los recursos que su municipio obtuvo gracias al mejor desempeño fiscal de su administración en escenarios deportivos, que incluyeron un coliseo, una

⁹⁶ José Wilmer Leal Abril, alcalde de Belén (Boyacá) 2012-2015, finalista del Reconocimiento a los Mejores Gobernantes en Reconciliación, en la categoría de municipios de menos de 10.000 habitantes.

pista atlética, una cancha de tenis y una villa deportiva. También se hicieron procesos de formación que motivaron a los jóvenes a la práctica del deporte, algunos, cada vez más, con nivel competitivo.

“Nuestro objetivo es incentivar procesos de inclusión y reconciliación por medio de la disciplina de la práctica deportiva en el corazón de Boyacá”, explica el alcalde Díaz.

Y Hansy Zapata Tibaquirá⁹⁷, alcalde de Tenjo (Cundinamarca) 2012-2015, también promovió procesos de cultura ciudadana, para que los habitantes de su municipio se hicieran partícipes de la defensa de sus propios derechos. Eso incluyó hacer producciones audiovisuales, obras de teatro, esculturas con materiales reciclados y murales, en los que se promovían mensajes por la convivencia y el respeto. Otros grupos de jóvenes participaron en actividades para mejorar el tránsito y proteger los bosques.

“Lo que más le impactó a la gente fue hacerse consciente de que ella misma tiene en sus manos las soluciones a los problemas”, dice el alcalde Zapata.

5.8 La reparación colectiva llega a las comunidades

El conflicto armado en Colombia produjo enormes daños a millones de colombianos. El desplazamiento, la pérdida de vidas, la violencia sexual, son solo algunas de las muchas afectaciones originadas por la acción de los grupos armados.

Pero hay también otros daños, no individuales, sino colectivos, que fueron provocados por la confrontación: la pérdida de la confianza entre los miembros de una comunidad o entre ellos y el Estado, el deterioro de las organizaciones sociales, la desaparición de sus líderes, la destrucción de los espacios que eran utilizados para el encuentro de las comunidades, entre muchos otros.

Para superar estos daños, la Ley de Víctimas prevé la reparación colectiva como una herramienta para reconstruir los lazos sociales destruidos por el conflicto y generar nuevos vínculos de confianza entre las comunidades y el

⁹⁷ Hansy Zapata Tibaquirá, alcalde de Tenjo (Cundinamarca) 2012-2015, ganador del Premio Mejores Gobernantes en la Superación de la Pobreza y finalista del Reconocimiento a los Mejores Gobernantes en Reconciliación, en la categoría de municipios entre 10.001 y 20.000 habitantes.

Estado. Decenas de organizaciones, que incluyen sindicatos, partidos políticos, grupos profesionales, así como comunidades e incluso municipios enteros, transitan actualmente esta ruta de la reparación colectiva. Alcaldes de diferentes lugares del país han encontrado en esta herramienta una alternativa para promover la reconciliación en sus comunidades y darle la mano a la población vulnerable.

Peñas Coloradas es una inspección de Cartagena del Chairá que se encuentra a unas cinco horas en lancha desde la cabecera municipal. Está integrada por cerca de 2.500 personas, que en 2004 debieron desplazarse como consecuencia de la ofensiva militar que se puso en marcha tras el fracaso de los diálogos de paz en el Caguán. Sus habitantes tuvieron que irse al área urbana de Cartagena del Chairá, pero también a Florencia, Santander de Quilichao, Santa Rosa de Cabal e incluso Cali.

Por varios años permanecieron sin contacto, pero en 2016, representantes de unas 600 familias pudieron regresar a Peñas Coloradas para conmemorar los 13 años de su desplazamiento.

Luis Francisco Vargas Correa, alcalde de Cartagena del Chairá para el período 2016-2019, ha comprendido la importancia de respaldar el proceso de reparación colectiva de esta comunidad, decisión que fue impulsada por la misma Mesa de Víctimas del municipio.

En diciembre de 2015, la comunidad fue reconocida por la Unidad para las Víctimas como sujeto de reparación colectiva y actualmente avanza en una fase que se denomina de alistamiento, en la que se le informa en qué consiste esta herramienta, para que sus propios miembros puedan determinar en una fase posterior cuáles son las acciones que esperan del Estado y del resto de la sociedad, para sentir que sus derechos son resarcidos.

En abril de 2016, cuando los habitantes de Peñas Coloradas se encontraron después de 13 años, se abrazaron bajo los árboles de la plaza principal, hicieron un círculo, tomados de la mano y cantaron emocionados el himno de Caquetá. Ese podría ser el comienzo de una nueva oportunidad para su pueblo.

Un corregimiento de otro municipio que ha sufrido mucho por la violencia encontró también en la reparación la oportunidad de reponerse.

Con el proyecto “Reparación transformadora en el corregimiento El Jordán”, la alcaldía de María Patricia Giraldo en San Carlos (Antioquia) se propuso cons-

truir, mejorar y adecuar la infraestructura física, para que la comunidad del corregimiento contara con espacios dignos que permitieran mejorar su calidad de vida y alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo.

El corregimiento El Jordán está ubicado al oriente del municipio de San Carlos, en Antioquia, tiene una población aproximada de 3.000 habitantes y su centro zonal cuenta con ocho veredas constituidas con la respectiva junta de acción comunal. Este corregimiento fue víctima de la violencia que se vivió durante el conflicto armado en el municipio, ya que fue la base de operaciones de los paramilitares que ingresaron desde el Magdalena Medio y se asentaron allí tomando el control y ejerciendo las funciones del Estado. Desde allí fueron planificados homicidios, masacres y desapariciones, lo cual generó que el municipio fuera reconocido a nivel nacional como un territorio de desplazamiento, violencia, miedo y destrucción. El 80 % de su población fue desplazada del campo y centros poblados.

El corregimiento El Jordán no fue tenido en cuenta por varias administraciones municipales que dejaron de realizar allí proyectos de infraestructura importantes para el desarrollo social integral de la comunidad. Según la alcaldesa:

“Estamos convencidos de que a la par que se repara de manera individual a las personas, se deben reparar colectivamente los territorios, pues la guerra no solo dañó individuos, sino también comunidades y frustró sueños. Fue así como elegimos al corregimiento El Jordán de nuestro municipio, epicentro de presencia paramilitar durante casi una década, para ejecutar el programa ‘Reparación transformadora’, el cual planteó la necesidad de reparar integralmente el territorio partiendo del reconocimiento de las dimensiones del desarrollo humano y las necesidades insatisfechas”.

Es así como en 2012 se inicia en la administración municipal “Unidos construyendo el San Carlos que queremos”, de la alcaldesa María Patricia Giraldo, un plan de intervención integral para dotar al corregimiento de infraestructura física para atender sus necesidades básicas insatisfechas.

Las intervenciones realizadas permitieron alcanzar logros en salud, educación, deporte, vivienda, movilidad, seguridad, servicios públicos y, en algunos casos, establecimiento de proyectos de vida.

Se hizo entonces la gestión ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Departamento para la Prosperidad Social, Isagén, el ICBF, la Empresa Social del Estado San Vicente de Paúl, el Banco Agrario, la OIM y la gobernación de Antioquia para implementar un plan de reparación en el cual, a la par que se reparaba a las víctimas del conflicto armado y el territorio, se generara desarrollo humano local.

En este sentido, construyeron el CDI, que atiende actualmente a niños y niñas del corregimiento de El Jordán; construyeron y mejoraron viviendas; se apoyó a la ESE San Vicente de Paúl para la remodelación del centro de salud; se hizo posible que los habitantes de El Jordán disfrutaran de agua potable; se habilitaron escenarios deportivos, y se ejecutaron proyectos de desarrollo comunitario en alianza con Isagén. Todo esto con el fin de que las condiciones de vida de la población llegaran incluso a ser mejores de lo que eran antes del conflicto armado, pues la inmensa mayoría de las víctimas, aun antes de los hechos victimizantes, tenían sustanciales limitaciones para el ejercicio de sus derechos fundamentales; de hecho, desde entonces hacían parte del universo de población vulnerable de San Carlos.

De esto se trata, no basta compensar el daño perpetrado por los grupos armados ilegales, también se requiere garantizar de manera permanente el goce efectivo de los derechos fundamentales.

La alcaldesa María Patricia Giraldo señala:

“Somos un modelo exitoso de paz y reconciliación... ahí está la diferencia.

Hemos logrado sanar las heridas, hacer un proceso de perdón, un proceso de resiliencia, de elaboración del duelo que ha conllevado a que 14.500 personas de las 20.000 desplazadas estén de nuevo en el territorio.

Ha sido un proceso de aceptación constante y permanente gracias a que todo el proceso lo hemos llevado desde el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE). Así hemos podido desarrollar, de la mano de las comunidades, agendas para lograr el restablecimiento de los derechos de los ciudadanos, para lograr la reconstrucción de los proyectos de vida y así empezar nuevamente la unidad productiva de nuestros campesinos retornados. Hoy San Carlos es el primer municipio en retorno y en desmilitado a nivel nacional y en reparar o indemnizar a su población

desplazada. Fuimos uno de los primeros municipios que construyó su plan de reparación colectiva, y ahí radica la gran diferencia.

Logramos resurgir de las cenizas, como el ave fénix, y hoy estamos en un municipio supremamente esperanzador, con calidad de vida para nuestros habitantes.

La paz se construye desde los territorios con acciones concretas. Por eso somos un municipio ejemplo de paz”.

5.9 Espacios para la convivencia

Trabajar por la convivencia entre sus ciudadanos debe ser una de las principales preocupaciones de los mandatarios regionales y locales. Muchos de ellos, que Colombia Líder ha conocido en sus desplazamientos a territorio, vienen haciéndolo desde mucho antes de que estuviera a la vista la posibilidad de firmar un acuerdo de paz.

Así por ejemplo, con miras a reducir los factores de violencia, Elsa Noguera impulsó durante su administración como alcaldesa de Barranquilla el programa Casas de Juventud, espacios en los cuales se brindaba a los jóvenes de la ciudad oportunidades de formación, recreación y emprendimiento. En las Casas los jóvenes podían dedicar su tiempo a actividades culturales, artísticas y deportivas o simplemente reunirse con otros compañeros para compartir ideas. Allí también se les daba asesoría relacionada con la oferta institucional para ellos, cursos de formación en alianza con la Corporación Técnica de Estudios Especializados del Caribe (Codetec), el SENA, la Secretaría de Cultura y la Academia de Artes Manuales y apoyo psicosocial para promover la participación, el buen trato en la familia y fomentar su autonomía social y personal.

La política pública de juventud de Barranquilla también incluía un programa gratuito en las escuelas públicas que ofrecía 13 modalidades artísticas de calidad a una población de 13.000 habitantes, además de oportunidades deportivas y apoyo a deportistas locales.

En Bucaramanga, el alcalde Luis Francisco Bohórquez, durante su administración 2012-2015, les apostó por su parte a los parques como espacio para promover la reconciliación y la convivencia, además de contribuir a la recuperación del espacio público y la conservación del medioambiente.

Además, buscó recuperar el apelativo que tuvo tradicionalmente Bucaramanga como Ciudad de los Parques, por lo cual incluyó en su plan de desarrollo acciones para mejorar los parques existentes y construir nuevos parques lineales, corredores y senderos ecológicos, con la meta de que los bumanguenses pasaran de disponer de 4,5 metros cuadrados de espacio público por habitante a 10, como lo establece el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad.

Adicionalmente, la administración se trazó el plan de facilitar las condiciones de acceso a los parques, con mejores equipamientos y escenarios para prácticas lúdicas, recreativas y deportivas, para todos los habitantes, pero en especial para niños, personas mayores y personas con discapacidad.

“Gracias a ello, Bucaramanga se consolidó como una ciudad tranquila en la que, a través de la recuperación de parques, redujimos índices delictivos, especialmente de hurto y microtráfico”, manifestaba el alcalde Bohórquez.